

El Sistema de Compras Jurisdiccionales como Herramienta de Mejoras en la Gestión Pública

La convocatoria de Proyectos PICE (Proyectos de Investigación en Ciencias Económicas) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, ofrece un espacio para fomentar la formación de investigadores y potenciar el desarrollo de la investigación en temáticas vinculadas con las carreras que se dictan en esta unidad académica, siendo las mismas: Contador Público, Licenciado en Administración y Licenciado en Economía.



En este caso se presentó un proyecto orientado a fortalecer los procesos de adquisiciones en el ámbito provincial. La organización y funcionamiento de las contrataciones estatales es un aspecto medular en la administración pública argentina, no solo por el volumen de recursos involucrados sino también por la incidencia que estos procesos tienen sobre la transparencia, la ejecución de políticas públicas y la percepción ciudadana sobre la eficiencia del Estado.

El presente trabajo aborda de manera exhaustiva las contrataciones públicas, destacando la comparación entre el régimen nacional y el de la provincia de Tucumán. El análisis se estructura de la siguiente manera: marco normativo, organismos responsables, tipos de contrataciones, niveles de centralización/descentralización, entre otros.

El régimen general de las contrataciones estatales a nivel nacional en la Argentina se estructura de acuerdo a la siguiente normativa: El Decreto 1023/2001, sus posteriores modificaciones –entre ellas el Decreto 1030/2016 y su reciente actualización mediante el Decreto 666/2024–, y la Ley 24.156 de Administración Financiera. Estos instrumentos constituyen los pilares normativos para la adquisición de bienes y servicios, ejecución de obras públicas y administración de concesiones en la esfera nacional. Establecen como principios fundamentales: razonabilidad, concurrencia, competencia, transparencia, publicidad y responsabilidad funcional.

En el ámbito provincial, la legislación clave es la Ley N° 6970 de Administración Financiera, junto al Decreto Acuerdo N° 22/1-2009, que reglamenta específicamente las compras y contrataciones de bienes y servicios. Para obras públicas, rige la Ley N° 5854, que regula procedimientos, modalidades y excepciones en la materia.

La Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) es el órgano rector del sistema nacional de contrataciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Está encargada de definir políticas, dictar normativa complementaria, supervisar la implementación operativa en cada organismo y mantener los sistemas digitales de gestión y transparencia.

Tanto a nivel nacional como en Tucumán, las contrataciones estatales se dividen en tres grandes categorías:

- **Bienes:** adquisición de mercancías, insumos, equipamientos, etc.
- **Servicios:** servicios personales y empresariales (estudios, limpieza, seguridad, consultoría, tecnología).
- **Obras Públicas:** construcción, reparación, ampliación y mantenimiento de infraestructuras.

Para cada tipo existen modalidades y procedimientos ajustados según el importe, la complejidad, la urgencia o la condición de exclusividad del objeto a contratar:

- **Licitación Pública:** regla general para grandes volúmenes o complejidad. Abierta, transparente y dirigida a múltiples oferentes.
- **Licitación Privada / Concurso Privado:** restricciones de participantes, generalmente por montos menores o necesidades técnicas puntuales.

- **Concurso de Precios:** mecanismo ágil para montos intermedios, mediante invitación restringida a un grupo de proveedores.
- **Contratación Directa:** para montos pequeños, urgencias, exclusividades, o cuando fracasan los procedimientos competitivos superiores.

En obras públicas, las jurisdicciones aplican criterios propios para obras por contrato, administración o sistemas mixtos, priorizando la licitación pública salvo excepciones claramente previstas en la normativa.

La tipificación tucumana replica la pauta nacional, pero incluye particularidades: se prioriza la contratación de empresas locales, se refuerzan las excepciones para situaciones de urgencia según lo determine el Poder Ejecutivo y se actualizan periódicamente los valores



umbrales de procedimientos.

En síntesis, la estructura de las contrataciones estatales en la Argentina muestra un esquema federal mixto, donde la centralización estratégica convive con estrategias descentralizadas de gestión operativa. Tanto el régimen nacional como el de la provincia de Tucumán, presentan sistemas jurídicos y organizacionales robustos, aunque sujetos a dinámicas de reforma y actualización permanente. La experiencia tucumana ilustra los desafíos de las provincias en acompañar el ritmo de la digitalización, la adaptación normativa y la demanda ciudadana de transparencia.